

Victorcano Ponce, Antonio Contreras y Juan Leon, contra el prefecto de Colima por la violacion de garantías que se ha mencionado.

Devuélvanse las actuaciones al juzgado de su origen con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes: publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así lo decretaron por mayoría de votos los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*J. M. Lafragua.*—*P. Ordaz.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Son copias que certifico. México, Julio treinta y uno de mil ochocientos setenta y uno.—*Lic. Agustín Peraltá*, oficial mayor.

AMPARO.

Juicio promovido ante el Juzgado de Distrito de Sinaloa por los Sres. Fortunato Vega y Compañía, contra la Tesorería del Estado, por violacion de garantías.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice:

Los Sres. F. de la Vega y compañía piden amparo porque la Tesorería del Estado, les exigió el pago de \$ 232, 50 cs. por derechos de mercado correspondientes á 265 (doscientos sesenta y cinco) bultos de mercancías extranjeras nacionalizadas que á su consignacion condujeron dos buques nacionales; manifiestan, que la Tesorería para este cobro se fundó en el decreto del Gobierno del Estado de 31 de Enero de 1870; decretó que invado las atribuciones del po-

der federal. Se ve, pues, que el amparo pedido se hace consistir en que el Gobierno y el Tesorero su ejecutor, han violado el artículo 101 de la Constitución federal en su fracción 3ª.

Segun lo expuesto, no toca al fiscal el exámen sobre la justicia ó injusticia que encierre el decreto de 31 de Enero, sino única y exclusivamente examinar si se ha violado el pacto federal de la Nación, ó en otros términos, si el Estado de Sinaloa ha usurpado atribuciones del poder federal.

El principal fundamento de la demanda se hace valer en el artículo 72 de la Constitución fracción 9ª. Ella dice que el Congreso tiene facultades para expedir aranceles sobre el comercio extranjero y para impedir por medio de bases generales, que en el comercio de Estado á Estado se establezcan retribuciones onerosas.

Observa el fiscal, que el artículo constitucional despues de hablar del comercio extranjero habla del de Estado á Estado, con lo cual quiso significar el comercio de efectos producidos en el mismo país, quiso igualar á estos en derechos; mas no con los que vienen del extranjero, que aunque nacionalizados, de allí vienen.

Se dice en la demanda, que la ley de 2 de Mayo de 1868, es un corolario del artículo constitucional citado. El fiscal se limita á decir que esa cita es contraproducente, por que la ley habla de los frutos de otros Estados y los efectos nacionalizados no son frutos del país sino extranjeros.

El otro apoyo de la demanda está en la fracción 1ª del art. 112 de la Constitución; pero advierte el fiscal que el Gobierno del Estado solamente ha impuesto un derecho de mercado y no de importacion como consta del decreto de 31 de Enero á que se refieren los solicitantes y que obra en autos.

Tal vez ese decreto sea injusto y desnivelo el comercio, pero no para toda injusticia ni ley que desnivelo el comercio, se es-

tableció el amparo, que no es un juicio para todo caso, sino para determinados.

No habiendo invadido el Gobierno del Estado las atribuciones de las autoridades federales, concluye el fiscal pidiendo se declare, que la justicia de la Union, no ampara á los Sres. F. de la Vega y Compañía.

Mazatlán, Mayo veinte de mil ochocientos setenta y uno. (Firmado.)—*L. Gaen*

Sentencia del Juez de Distrito.

Mazatlan, Junio catorce de mil ochocientos setenta y uno.

Vistas: oídos el pedimento fiscal y el alegato del solicitante. Considerando que los Estados son soberanos para expedir las leyes que crean conformes á su régimen interior: que el C. Gobernador expidió su decreto de 31 de Enero de 1870 en virtud de facultades extraordinarias concedidas por el H. Congreso en hacienda y guerra: que esta soberanía de los Estados, esta limitada por las disposiciones que emanan de la Constitución general de la República: que la violación de cualquiera de las garantías que otorga á los mexicanos la misma Constitución, es motivo de queja, y sobre su existencia ó no existencia debe conocer y resolver la justicia federal; que el art. 72 de la Constitución fracción 9ª, manifiesta que el Congreso de la Union se reserva el derecho de "impedir, que en el comercio de Estado á Estado se establezcan restituciones onerosas:" que es indudable que gravados los efectos extranjeros nacionalizados al introducirse á otro Estado se les grava con un nuevo impuesto como en el caso presente, y esto esponer trabas al comercio y detener su desarrollo: que todas las autoridades deben proteger generosamente como la fuente mas fecunda de la riqueza pública: que el fiscal cree que el decreto á que se refiere este juicio ha impuesto un *derecho de mercado y no de importación*; que el efecto es el mismo "gravar" aunque el

nombre sea distinto: que los Estados no pueden en ningún caso establecer impuestos sobre importaciones ó exportaciones, art. 111 y 112 fracción 1ª de la Constitución.

Por todas estas razones. A nombre de la Justicia federal el C. Jic. Antonio Díaz Martínez, Juez primero suplente de distrito del Estado, definitivamente juzgando falla con las siguientes proposiciones:

Primera; La justicia de la Union protege y ampara á los señores F. de la Vega y Cª contra los efectos del decreto de 31 de Enero de 1870 expedido por el C. gobernador del Estado, en virtud de facultades extraordinarias, que impone el derecho de mercado á los efectos extranjeros nacionalizados.

Segunda; Publíquese esta sentencia por los periódicos: remítase copia á la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se inserte en el *Semanario Judicial*, y acompáñese el expediente para su revision. Así lo decretó y mandó el juez, firmando con los de asistencia.—*Lic. Antonio Díaz Martínez.*—*A. Miguel Salas.*—*A. Ramon Loerraga.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México Julio veinticinco de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de distrito de Sinaloa, por los señores Fortunato Vega y compañía contra la tesorería del Estado que les exigió el pago de doscientos treinta y dos pesos cincuenta centavos por el derecho de mercado, correspondiente á doscientos sesenta y cinco bultos de mercancías extranjeras nacionalizadas que á su consignación condujeron dos buques nacionales, fundando su queja en que dicha autoridad basa sus procedimientos en un decreto inconstitucional dado por el C. gobernador de Si-

nales en virtud de facultades extraordinarias concedidas por la Legislatura. Visto el parecer fiscal y las demás constancias de autos.

Considerando: que aun cuando los Estados de la federación en uso de su soberanía puedan dictar leyes para su régimen interior, tienen que sujetarse á las provenciones constitucionales, y que en el presente caso el gobernador de Sinaloa, al expedir su decreto de 31 de Enero de 1870 imponiendo un derecho llamado del mercado á los efectos nacionalizados en otros Estados, al introducirse en el de Sinaloa sin permiso del Congreso general, ha hecho una violación expresa de las garantías otorgadas en la fracción 1ª del art. 112 del pacto fundamental de la República; se decreta: que por sus propios legales fundamentos es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada por el Juzgado de Distrito de Sinaloa, que en su parte resolutive manda en nombre de los poderes de la Union amparar y proteger á los señores Fortunato de la Vega y compañía, contra los efectos del decreto de 31 de Enero de 1870, expedido por el C. gobernador del Estado, en virtud de facultades extraordinarias que impone el derecho de mercado á los efectos extranjeros nacionalizados.

Devuélvanse sus actuaciones al Juzgado remitente con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así lo decretaron por unanimidad de votos los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron. *S. Lerdo de Tejada.—Pedro Ogazon.—Juan J. de la Garza.—José Arteaga.—J. M. Lafragua.—Pedro Ordaz.—Ignacio Ramirez.—M. Auza.—S. Guzman.—M. Zavala.—José García Ramírez.—Luis María Aguilar,* secretario.

Son copias. México, Agosto dos de mil ochocientos setenta y uno.—*H. Guzman.*

AMPARO.

Juicio promovido ante el Juzgado de Distrito de Coahuila por la Sra. D^a Luisa Ibarra de Zuloaga, por violación de las garantías constitucionales que aseguran la propiedad.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

De las constancias agregadas en este expediente, se desprende que la Sra. Ibarra de Zuloaga, solicita de ese Juzgado el recurso de amparo, por creer violada por el decreto núm. 123 del gobierno del Estado la garantía que le concede el art. 27 de la Constitución. El decreto mencionado impone en su artículo 4º una servidumbre á los terrenos de la propiedad de la reclamante, y el 6º autoriza al ejecutivo para que haga la expropiación necesaria por causa de utilidad pública y con arreglo á la ley. Ese Juzgado se ha servido pedir el informe respectivo al C. gobernador, que fué rendido segun consta de autos el 1º de Abril del presente año, y el cual manifiesta que no se había ejecutado lo dispuesto por la Legislatura en su decreto mencionado núm. 123. Posteriormente á este informe y en auto del 17 del mismo mes, ordenó vd. que se pidiera nuevo informe con justificación, el cual no ha sido rendido hasta hoy, sin embargo de que el C. gobernador sancionó el decreto, ordenando la observancia del reglamento á la ley núm. 123, agregado al expediente y publicado en la Villa de San Pedro el 20 del actual citado. Este reglamento cede á los vecinos de la Villa de San Pedro, diez y seis sitios de ganado mayor y dispone la manera de la medición etc., etc.

El reclamante hace valer en su ocurno de fojas 1ª, dos hechos: primero, que se ha atacado su propiedad imponiendo una servidumbre, y segundo, que se autorizó al ejecutivo para que si lo creyere necesario hiciese la apropiación de la misma propiedad: trataré pues estos dos puntos.